

Sergi Castillo Prats. La batalla per la sanitat valenciana. Valencia, 2019. Diputació de Valencia.

En la introducción señala que la batalla por la sanidad valenciana, más que una pugna entre modelos de gestión sanitaria o unas diferencias ideológicas, "fue una lucha por un negocio que mueve miles de millones de euros de las arcas públicas (p. 11), movilizados por un grupo reducido y endogámico de redes clientelares y redes de empresas, las que, entre 1998 y 2015, estuvieron en total complicidad con la Administración, especialmente de la Generalitat".

En 2015 se pone fin a esta complicidad y esta falta de control que permite a estas redes endogámicas de empresas, "personas de confianza" y redes clientelares hacerse progresivamente con gran parte del negocio de la sanidad pública. Se producen dos cambios: el primero, son imputados en procesos judiciales varias tramas de extorsión de bienes públicos y de su gestión: los procesos de Gürtel, Taula y otros. Acaban haciéndose públicos escándalos de corrupción que involucran a 5 sobre 8 Consellers de Sanitat y 3 sobre 4 presidentes de la Generalitat valenciana.

El nuevo gobierno de Valencia, formado en el llamado "Pacte del Botànic" en 2015, iniciará un proceso de control de la sanidad pública, atención a la facturación, a los cobros, pagos, precios y contratos de las empresas sanitarias.

Ribera Salud, quien había construido el Hospital de Alzira, empieza siendo una empresa casi-fantasma, sin empleados, gestionada por Alberto de Rosa, creada y financiada por unas Cajas de Ahorro valencianas que estaban siendo convertidas en un juguete en las manos del PP y de una red de intereses próximos.

Una serie de asociaciones habían estado haciendo frente a las redes de corrupción que se iban apropiando de la sanidad pública valenciana. Estas asociaciones tenían además que desvelar como "la política de propaganda (de la Generalitat regida por el PP valenciano) estaba instalada en un mundo paralelo" (p. 24).

Se dan casos flagrantes: al lado del Hospital público de Elx (Elche), abandonado y miserable, construyen el Hospital Elx-Vinalopó gestionado en régimen de concesión (p. 25).

Recuerda el autor que el proceso de privatización de la gestión sanitaria comienza con el "Informe Abril": "Informe y recomendaciones de la comisión de análisis y evaluación delo Sistema Nacional de Salud", de 1991 (llamado "Informe Abril" porque el gobierno de Felipe González se lo encargó a Fernando Abril Martorell, quien fue ministro de UCD). Ese informe abre la puerta a muchas formas de privatización de la sanidad pública. A partir de ese momento los intereses privados empiezan a rondar la sanidad pública, inician estrategias de lobby, de presiones sobre las Administraciones –destacadamente, presiones indebidas, con agenda oculta- y los sucesivos "tira

y afloja” entre los intereses de una red de empresas y agiotistas y los intereses colectivos de la población. El resultado, una progresiva privatización que, en términos globales, tuvo como resultado: a) una ampliación de la privatización de la gestión y también de la propiedad privada de las instancias sanitarias; b) un deterioro notable de la atención sanitaria; c) una pérdida importantísima del control público sobre la gestión de la sanidad; d) la emergencia de un negocio de miles de millones de euros (diez mil millones) ; e) que este negocio, este control y esta gestión de la sanidad en España pasara sucesivamente de manos públicas a las manos privada de una red endogámica de empresas, fondos y personas próximas al PP, para acabar finalmente en manos extranjeras: hoy un porcentaje importantísimo de la actividad sanitaria en España la realizan empresas alemanas, inglesas y de los EEUU: a eso condujo la Ley 15/97, de 25 de abril, de nuevas formas de gestión del SNS.

En conjunto, el libro relata la crónica de la pugna entre las redes de empresas enredadas en el “capitalismo de amiguetes” del PP y de fondos globales por un lado, y por el otro los intereses por mantener la defensa de la Sanidad Pública.

A partir de 2010, los fondos globales y las ETN –Empresas transnacionales-, bien interconectadas entre ellas, van a ver la oportunidad de ejercer fuertes presiones desde el ápice del poder económico global sobre la economía española (y de los países del “sur de Europa”). En plena crisis, en gran medida construida por la cúpula de las ETN globales radicadas en la City y en Nueva York, Pricewaterhouse Coopers (PwC) va a publicar un anuario sobre sanidad, “Temas candentes de la sanidad española en tiempos de crisis”¹, en el que proclama: “Es el momento de relanzar la colaboración público-privada” (p. 30). En 2010 se constituye el IDIS (Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), que actúa como lobby en las presiones para defender los intereses de las empresas privadas (p.37).

En 2010 ya el gobierno del PP valenciano se arranca en seco: en abril anunció la privatización de toda la sanidad autonómica y pretende repartir la sanidad pública valenciana entre Capio, Ribera Salud, USP Hospitales y grupo Quirón².

Entre las “avanzadas” técnicas de gestión de los nuevos gestores privados se destacan variadas “técnicas de ingeniería pícaro-financieras” (p. 48), como facturaciones por cuidados que no corresponden, por salud mental ya incluida, y... “Alzira facturaba a otros hospitales de los que recibía pacientes, pero no pasaba lo mismo cuando sus pacientes se destinaban a otros centros” (p. 48); la utilización de infraestructuras públicas para atender pacientes privados (p. 54), o facturar varias veces por distintos conceptos una misma prueba, por

1 La publicación “10 temas candentes de la sanidad española” fue publicada anualmente por PwC, cuando menos entre 2011 e 2013. En 2017 fue publicada por el Diario Médico y firmada por Julián García Vargas, Raimon Belenes e Ignacio Riesgo. En 2019 fue editada por el Círculo de Empresarios y firmado por “Vargas, Pomés & Riesgo Consultores”, esto es, Julián García Vargas e Ignacio Riesgo. Julián García Vargas, quien fue ministro de sanidad en 1986-91, es hoy un activista a pro de la expansión de la sanidad privada. Ignacio Riesgo fue responsable de sanidad de la consultoría PwC

2 USP Hospitales se fusiona con grupo Quirón en 2012.

ejemplo "de esta manera, en las estadísticas, la Comunidad Valenciana era la primera en número de resonancias magnéticas por habitante" (p. 120-121; p. 137)). Estas dobles y triples facturaciones por el mismo servicio las hacía también sin recato el IVO (Instituto Valenciano de Oncología), autodenominado fundación sin fines de lucro, quien tuvo "grifo abierto" en la Generalitat. Incluso durante cierto tiempo estuvo caída la tecnología del Hospital de Xàtiva, no se reparó y se derivó a Alzira, quien así ampliaba pacientes, negocio y facturación...

En 2013 la CNC, Comisión Nacional de la Competencia, elaboró un informe que testifica la ausencia de competencia en las licitaciones; una participación "alarmantemente reducida de empresas" (p. 54). Y tanto: hoy todas o casi todas ellas fueron, después de varios avatares de fusiones y adquisiciones (F+A), absorbidas por Fresenius.

Luego empiezan las compras de empresas: el fondo de EE.UU. Centene compra la parte de Bankia en Ribera Salud (Centene tiene en su Consejo a Tommy G. Thomson, quien fue ministro de Salud en el gobierno de George W. Bush); después compra la parte de Adeslas.

Si Alberto de Rosa era consejero delegado de Ribera Salud, su hermano Fernando "en la triple condición de hermano, juez y político" (p. 66), fue Conseller de Justicia y fue nombrado vicepresidente del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) en el gobierno Rajoy. Estos "vínculos peligrosos" son frecuentes entre la trama de la apropiación de la sanidad pública, y permiten reforzar la consciencia de impunidad y protección de los tres poderes públicos "independientes".

Hay ciertos clanes que nos dejan perplejos, por ejemplo, los clanes de los Matoses: miembros de la familia ocupan desde puestos en la cúpula de hospitales hasta la cúpula del sindicato CSI-CSIF. Así lo denunciaba en su momento Pedro Durán del SIMAP (Sindicato de Médicos de Asistencia Pública):

"Lo que hicieron fue montar una red político-sindical en la que el soborno no era el dinero, sino puestos de trabajo (...) la dirección les hace el favor y después les cobra. Los tenía a todos pillados". Para controlar la comunicación "Teníamos problemas para contar lo que pasaba y que algún medio de comunicación publicara nuestras notas de prensa. El gerente llamaba personalmente a los directores de los medios para amenazarlos con retirarles la publicidad. Eso condicionaba la información" (p. 73)

Cosa que se extendía a las prácticas sindicales. Así lo cuenta Alós, del periódico Levante:

"Durante muchos años había como un entendimiento cordial entre empresa y sindicatos, y estaban más cómodos con ella que contra ella, excepto en algún caso minoritario" (p. 74)

El escándalo de las comisiones (pp. 81 y ss.): Ribera Salud crea en 2009 una empresa intermedia, B2b Salud, a través de la que cobraba comisiones confidenciales a los laboratorios en las compras de la sanidad pública. Las comisiones llegaban mismamente al 30%. El honorable magistrado archiva el caso en 2008 porque "el pacto era entre dos empresas privadas" (p. 84)

También fue un buen negocio para la privada la decisión de Zaplana de suspender la adquisición de equipos de resonancia magnética en los hospitales públicos, puesta en marcha por su predecesor Lerma (Psoe) y en cambio instalar equipos privados, en nombre de la aireada "colaboración público privada": más déficit para la Generalitat.

Son muchas las decisiones desde la administración pública valenciana que benefician a empresas, amigos y cómplices concretos en perjuicio de la buena gestión pública, desposeyendo la sanidad y el erario público en favor de beneficiarios de las redes de "personas de su confianza". En demasiados casos jueces, magistrados y funcionarios de Hacienda cooperaron para archivar los casos bastante patentes de comportamientos públicos de mal gestor a sabiendas. No podemos referenciar aquí todos. El libro es muy concienzudo al tiempo que se lee con ligereza e interés.

Un importante aspecto a destacar, que forma parte del programa "neoliberal", es decir, de la estrategia de las empresas, especialmente de las ETN y fondos globales, consiste en la descualificación de la administración pública, para así conseguir subordinarla estratégicamente a los programas de los intereses privados. En el caso de la radiología, cuando el equipo de Carme Montón se puso a preparar el nuevo modelo,

"El modelo externalizado había tenido consecuencias. Los radiólogos y técnicos de la sanidad pública no conocían la tecnología, por lo que había que hacer una transición ordenada" p. 122

La cuestión del control público sobre la actividad contratada a la sanidad privada también se muestra llena de abandonos interesados. Por ejemplo, el IVO dijo que su actividad estaba bien escrutada por inspectores públicos. Pero ocultaba el conocido truco:

"Es cierto que había inspectores de sanidad para este proceso, pero el cometido principal de los inspectores era que el trámite administrativo había sido correcto y había seguido los pasos de la normativa. Pero en ningún caso se valoraba si había necesidad o justificación clínica para que la Generalitat lo pagara" p. 132

El propio Llombart, del IVO, va a llegar a Conseller de Sanidad (p. 133)

Sergi Castillo reserva un capítulo al "saqueo de la bata blanca", donde narra los bien atrevidos intentos de algunas sagas de médicos para lanzar empresas parasitando la administración pública, como el caso de la saga de los Blasco y varios otros.

En conjunto, el libro narra un proceso de deslealtad y saqueo de la administración pública valenciana por parte de un entramado de políticos, empresarios e incluso profesionales de la sanidad que tenía por resultado la apropiación indebida de la sanidad pública, escamoteando el debido control y la gestión diligente a que está obligada la Administración Valenciana, permitiendo con complicidad el descontrol, el engaño, la descualificación de la administración pública. Sergi Castillo describe las personas, clanes y grupos que se confabularon en este desastre, y en el que magistrados, jueces, fiscales y Hacienda no supieron ver más que "faltas administrativas" por lo que sobreseyeron todo lo que pudieron, hasta que finalmente la administración anticorrupción consiguió desvelar y procesar alguna de las secuencias de esta trama.

El último capítulo se dedica al rescate.

El rescate venía dado por los "acuerdos del Botánico" de 2015, el programa para la alianza del nuevo gobierno. Un punto era muy claro:

"Punto 92. Recuperación de los servicios privatizados y concesiones administrativas. Poner en marcha auditorías. Promover la derogación de la Ley 15/95"

Carme Montón fue Consellera de sanidad e hizo una labor firme de auditar, controlar y revertir conforme las circunstancias lo permitían. La oposición es muy dura. El plan estratégico de Carme Montón

"se fundamenta en cuatro pilares: el aumento del presupuesto, la gestión eficiente eliminando las bolsas de ineficacia y descontrol (...) la apuesta por la mejora de las condiciones laborales y aumento del personal y un plan de inversiones en tecnología e infraestructuras" p. 188

"los grupos privados esperaban conseguir que el cambio de gobierno no alterara sus privilegios". Sin embargo, la nueva consellera, Carme Montón, renueva los equipos de gestión de la sanidad, pone fin a la "barra libre", establece límites formales al monopolio de empresas de la sanidad, acaba con una colección de tratos de favor y compadreo y consigue la reversión del Hospital de Alzira cuando llega el momento.

Las presiones que resistió Montón fueron impresionantes, desde una piña de abogados provistos de talonarios a las mesas de twiteros del PP, una lista de viejas glorias del Psoe, prensa, incluso consultoras como Deloitte (p. 94), hasta todos los intentos imaginables de desprestigio personal, y ya para colmo, la indecente actuación del embajador de España en EEUU a favor del fondo de inversión Centene -un fondo de EEUU- y en contra de los intereses expresados por la administración pública española,

"Centene Corporation movió los tentáculos. El ex-ministro de defensa con Mariano Rajoy, Pedro Morenés, embajador de España en Washington, había telefoneado a Ximo Puig con la finalidad de evitar que

el Hospital de la Ribera tornara a manos públicas. Incluso la embajada de los EEUU en España envió una carta oficial al Palau de la Generalitat en la que se defendía la inversión del grupo Centene y las virtudes del modelo de colaboración público-privada” 205

La Consellera se va a mantener firme. Su labor fue admirable. Pero alrededor del gobierno de Ximo Puig se van situando intereses menos proclives a la política de Montón. Finalmente, Montón pasa a formar parte del gobierno central, la nueva Consellera en el País Valenciano contemporiza más, y finalmente Carme Montón cae del Ministerio de Sanidad por cuestión de un “corta y pega” en una memoria de un Master.

La batalla por la recuperación de la sanidad pública sigue su curso.

Iago Santos